

Cuadernos del Sur

Año 20 - N° 37

Mayo de 2004

www.cuadernosdelsur.org.ar

Tierra  fuego
del

Brasil: Balance del gobierno Lula*

João Machado**

I - Introducción

Poco antes de completar los 14 meses, el gobierno Lula cayó en una crisis de la cual un mes después no ha salido todavía. Desde fines de febrero viene enfrentando una combinación de gravísimas denuncias de corrupción de miembros del gobierno con un crecimiento de la oposición a su política económica.

La denuncia de corrupción más espectacular fue la divulgación, el día 13 de febrero, de un video en el cual un ciudadano hasta entonces desconocido para el público, Waldomiro Diniz, aparece conversando con un capitalista de juego clandestino, negociando y pidiéndole contribuciones financieras para campañas electorales, así como un porcentaje para sí mismo. En la época de la grabación (en 2002), Diniz era el presidente de la Lotería del Estado de Río de Janeiro

(Loterj). Con el inicio del gobierno Lula, fue nombrado subjefe para Asuntos Parlamentarios de la Casa Civil. En ese carácter estaba encargado de las relaciones del gobierno con los parlamentarios. Ocupaba, por lo tanto, una función clave: era uno de los principales asistentes del ministro José Dirceu, sino el principal. Además era amigo íntimo del ministro, con quien ya había hasta compartido el domicilio.

José Dirceu era uno de los dos ministros más fuertes del “núcleo duro” de Lula, responsable por la articulación política y la coordinación del gobierno. En la víspera de la divulgación del video, fue clasificado por el presidente, quien se expresa frecuentemente en metáforas futbolísticas, como “capitán del equipo” de ministros. Su drástico debilitamiento, sin embargo, no pudo evitarse. Las dos

* Título original: “Balanço do governo Lula: 14 meses e enfrentando sua primeira grande crise”. Traducción de Katharina Zinsmeister y Graciela Poblet.

** João Machado es economista y miembro de la dirección nacional de la tendencia Democracia Socialista (DS) del Partido de los Trabajadores (PT).

justificaciones que presentó se mostraron fragilísimas: que su confianza en un amigo había sido traicionada, ya que desconocía por completo lo que su asistente había hecho, y que los actos ilícitos de Diniz habían sido anteriores al gobierno Lula. El hecho de que Diniz hacía negocios oscuros cuando era presidente de la Loterj era ampliamente conocido por los miembros del PT de Río de Janeiro, y el propio José Dirceu – entonces presidente nacional del PT – había sido informado del asunto. Además, las investigaciones demostraron luego que Diniz continuó cometiendo actos ilícitos durante el período en el cual tenía un cargo de confianza en el gobierno Lula.

El debilitamiento de José Dirceu pareció, a primera vista, fortalecer la posición del otro pilar del “núcleo duro” lulista, el ministro de Hacienda, Antônio Palocci. Sin embargo, esta impresión duró poco. La divulgación, a fines de febrero, que el PBI (Producto Bruto Interno) brasileño se había reducido en 0,2 % en 2003 fue la señal para el recrudecimiento de las críticas al carácter ultra-conservador de la política económica del gobierno Lula.

Esta divulgación no constituyó una sorpresa total. En los últimos meses ya se venía sabiendo que el resultado iba a ser muy malo. El gobierno, sin embargo, todavía esperaba algún crecimiento, aunque superase poco el cero. Y una reducción en 0,2

% contrasta mucho más vivamente con lo que el gobierno Lula dijo durante casi todo el año 2003. En el primer semestre, mientras el equipo económico hablaba de un crecimiento del orden del 2 o 3% durante 2003 (un crecimiento muy bajo para las necesidades de la economía brasileña), Lula prometía el “espectáculo del crecimiento”.

Más allá de eso, la reducción del PBI no fue el resultado económico divulgado más negativo. Peor que ello fue, por ejemplo, el hecho de que el ingreso medio de los trabajadores había caído un 12,9 % en términos reales durante 2003 – la sexta caída anual consecutiva (datos del IBGE, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, un órgano oficial).

Así que no es sorprendente que las críticas hacia la política económica se fueron acentuando mucho, incluso por parte de partidos que forman parte de la “base aliada” del gobierno, como el PC do B, el PMDB y hasta el PL (este último fue el partido que más se destacó en la crítica: su presidente pidió explícitamente la renuncia del ministro Palocci y del presidente del Banco Central, Henrique Meirelles). Hasta el PT mismo (de manera tímida y, sobretudo, extremadamente ambigua) comenzó a pedir cambios en la política económica. También los sindicatos y el movimiento social en general, de un lado, y los empresarios, del otro, elevaron el tono de las críticas a la política eco-

nómica, vista como benéfica apenas para el sector financiero, interno y externo.

Para agravar las cosas para el ministro Palocci, las denuncias de corrupción comenzaron a amenazarlo también a él, con la difusión de que un ex secretario suyo (Rogério Busratti) trabajaba junto a Waldomiro Diniz.

Así, entre febrero y marzo, la situación del gobierno Lula cambió radicalmente. De un gobierno considerado fuerte, con una base parlamentaria amplísima y un prestigio popular razonable pasó a ser visto como un gobierno frágil. Su popularidad está sin duda estancada; la base parlamentaria, incluso la más conservadora, critica el gobierno; y las desavenencias internas se mostraron más agudas.

Vale notar que las dificultades del gobierno Lula se explican por una razón totalmente diferente de los riesgos que, en el momento de la elección, se solían imaginar que iba a correr. Se pensaba que el gran problema del gobierno sería la oposición de los sectores conservadores; que el gobierno podría correr peligro si quería hacer cambios demasiado radicales, para los cuales no podría tener suficiente base de apoyo; y que enfrentarían la oposición del FMI, de los capitales internacionales, etc. De hecho, el gobierno enfrenta oposición y desprestigio por ser demasiado conservador, por haber agravado la situa-

ción económica heredada de F. H. Cardoso manteniendo una política económica muy similar, y por parecerse a los gobiernos anteriores hasta en los métodos de hacer política que el PT siempre combatió. El gran problema del gobierno Lula es la frustración que comienza a provocar en aquellos que creían que el PT en el gobierno haría lo que siempre había prometido hacer.

Sin embargo, todavía hay sectores de la población brasileña y hasta de militantes de izquierda que creen que el gobierno Lula podrá cambiar de carácter y retomar, por lo menos parcialmente, la agenda con la cual fue electo. Durante los primeros meses de 2003, a parte, la dirección del PT y los propios miembros del núcleo de gobierno decían que habría una "etapa de transición", y que después aparecería la verdadera cara del gobierno Lula. Esta idea está ahora bastante desacreditada y ya no es usada como argumento básico para defender el gobierno. Por otro lado, fue puesta en evidencia otra idea: que habría una disputa en el propio núcleo del gobierno entre un ala de derecha conservadora y neoliberal (representada sobretudo por el ministro Palocci) y un ala más propiamente petista, que estaría todavía luchando para que el gobierno asumiese algún carácter de izquierda, representada principalmente por el ministro José Dirceu. Los defensores más enfáticos de esta línea de argumentación llegaron a

decir que las denuncias de corrupción que amenazan a José Dirceu formarían parte de una maniobra de los sectores más neoliberales del gobierno, interesados en debilitarlo.

Que éste haya sido el principal argumento en defensa del gobierno, por lo menos en el ámbito de los que se identifican con la orientación histórica del PT, ya dice mucho sobre la frustración que está invadiendo el país. Si el gobierno Lula tiene tales desavenencias en su “núcleo”, ¿qué se podrá esperar de él? Y aún admitiendo que la iniciativa de las denuncias podría haber sido de los liberales, ¿por qué José Dirceu eligió como asistente a alguien como Waldomiro Diniz? Por otro lado, está claro que no hay un fortalecimiento del “ala neoliberal” en detrimento del “ala petista” del gobierno; lo que hay es un debilitamiento del gobierno en conjunto.

De cualquier manera, es útil discutir cuáles son las posibilidades aún existentes de cambio de orientación del gobierno Lula. Éste es el objetivo de este artículo; para eso, procurará evaluar cuál es el carácter fundamental del gobierno Lula.

No se hará ninguna evaluación directa del proceso de corrupción existente en el gobierno; admitimos generosamente que si existe (como todo indica), no forma parte de su naturaleza fundamental. Tampoco será comentada la sorprendente ineptitud de diversos sectores del gobierno, re-

pitando la misma hipótesis generosa. Serán abordadas dos cuestiones: 1) ¿cuáles fueron las opciones fundamentales del gobierno en su primer año, evaluando las iniciativas a las que el propio gobierno da mayor importancia; y 2) ¿cuál es la naturaleza de las polémicas existentes en el “núcleo del gobierno”, o incluso del gobierno en conjunto?

Este tratamiento es el más favorable posible a la hipótesis que el gobierno Lula podría pasar por un cambio fundamental en su orientación. Sin embargo, la conclusión de este análisis no se revelará, de ninguna manera, favorable a esta hipótesis. El carácter conservador del gobierno Lula no parece estar en cuestión.

II - Las opciones fundamentales del primer año de gobierno

a) Realizaciones en el frente económico: recuperación de la confianza y control de la inflación (¿?)

Desde el inicio, el gobierno Lula asumió un carácter muy diferente a aquel que la gran mayoría de los votantes y observadores esperaba. Esa diferencia se expresa más agudamente en el hecho de que viene siendo un gobierno citado como ejemplar por el FMI —como por ejemplo en la conferencia de Anne Krueger divulgada en el sitio web del FMI bajo el título “Las recompensas de la virtud”, donde ella cita a Brasil como ejemplo de país que estaría comenzando a cose-

char los beneficios de la “dura política fiscal” adoptada en 2003 (desde el comienzo el gobierno Lula anunció la elevación del superávit fiscal primario, esto es, de los recursos destinados al pago de la deuda pública, del 3,75 % del PBI al 4,25 %). Virtud, para el FMI, como se sabe, es justamente la “dura política fiscal”, por el lado de la política monetaria ortodoxa que mantienen las tasas de interés brasileñas entre las más altas del mundo, etc.

La línea de argumentación de Anne Krueger es la misma utilizada por el equipo económico del gobierno Lula: los “sacrificios” de 2003 habrían sido necesarios, y la recompensa por esta opción virtuosa vendría en 2004. Según el gobierno Lula, los “sacrificios” de 2003 habrían hecho posible evitar la crisis de insolvencia externa (ganando la “confianza” de los mercados) y controlar la inflación. Los principales indicadores para la superación de la crisis externa habrían sido la reducción del llamado “riesgo Brasil” (que llegó a quedar debajo de los 400 puntos, para aproximarse en el segundo semestre de 2002 a 2000 puntos) y de la tasa de cambio del dólar (que después de estar cerca de 4 reales por dólar cayó a poco menos de 3 reales).

Incluso ahora, luego de la divulgación de la reducción del PBI en 2003, del aumento del desempleo, de la caída del ingreso del trabajo (mientras los rendimientos financieros crecie-

ron), el equipo económico continúa afirmando que la política de 2003 fue completamente correcta, y anuncia una recuperación brillante de la economía para 2004. El propio presidente de la República, en un discurso del día 11 de marzo, defendió la política económica aplicada y garantizó que ella será mantenida. Defendió incluso uno de sus aspectos más criticados recientemente hasta por economistas conservadores, que es la rígida política de metas de inflación. Se mostró contrario a cualquier flexibilización de la misma. Reaccionó, entre otras cosas, a una nota oficial del PT que pidió cambios en la política económica sin explicitar ninguna crítica directa.

Diversos economistas ya llamaron la atención al hecho de que las “conquistas” en el frente externo se debieron a una mejora general de los llamados “mercados emergentes” desde fines de 2002, con un retorno a los mismos de los capitales de corto plazo. El caso brasileño no fue muy diferente en este aspecto al de otros países. Además, 2003 fue un año durante el cual la situación internacional de la economía estuvo razonablemente favorable para los países dependientes; y, en general, los mismos tuvieron resultados económicos mucho mejores que Brasil.

Por otro lado, la fragilidad de las “conquistas” brasileñas en el frente externo quedó evidenciada en la segunda quincena de enero, cuando

una reducción general en los movimientos de capitales de corto plazo para los mercados “emergentes” (explicada principalmente por la percepción de que las tasas de interés en los EE.UU. aumentarían más temprano que lo previsto) hizo subir el “riesgo Brasil” y el dólar; subas que se repitieron a mediados de febrero, cuando el estallido del escándalo de corrupción provocó dudas respecto de la solidez del gobierno Lula; y otra vez en marzo, como consecuencia de la inestabilidad provocada por el atentado de 11 de marzo en España. Por otro lado, el control razonable de la inflación se explica en gran medida por la caída del dólar, con la posterior estabilización de su valor.

Las ganancias obtenidas con la política económica ultra-conservadora son escasas e ilusorias.

Por otra parte, tuvo un mal resultado respecto de uno de sus principales objetivos –impedir el crecimiento de la deuda pública como proporción del PBI. Esto fue visto como la clave para conseguir la “credibilidad” ante los mercados. La elevación del “superávit primario” llevó al aumento del pago de intereses; pero la elevación de las tasas de interés hizo que los intereses adeudados por el sector público aumentasen todavía más (el sector público pagó 9,25% del PBI en intereses; la relación deuda pública / PBI llegó a 58,16%). Por esta razón, entre otras, la recuperación de la “confianza de los mercados” fue muy frágil.

El impacto negativo de esta política sobre los indicadores económicos en cuanto a la situación de los trabajadores fue dramático. El mercado de trabajo continúa siendo una calamidad, por lo menos en los grandes centros urbanos. El desempleo y la informalidad aumentaron, los salarios reales cayeron. Los datos del IBGE, referidos a las seis principales regiones metropolitanas del país, muestran que la tasa media de desempleo abierto aumentó del 11,7% entre marzo y diciembre de 2002 al 12,5% en el mismo período de 2003. Según el mismo IBGE, el ingreso medio sufrió una reducción de nada menos que del 12,9% en términos reales (el ingreso medio de los trabajadores cayó por sexto año consecutivo). El número de ocupados registrados en el sector privado disminuyó en términos absolutos, pasando a representar el 43,5% del total de los ocupados en diciembre de 2003. La tasa de desempleo abierto medida por el DIEESE en la región metropolitana de Sao Paulo se ubicó en promedio para 2003 en el 19,9%, un récord histórico (es la mayor tasa desde 1985, cuando este relevamiento empezó a hacerse).

Mientras el ingreso de los trabajadores caía, los bancos tuvieron aumentos en sus ganancias y los poseedores de riqueza financiera en general ganaron mucho. 2003 fue el año en el cual el sector público pagó un monto récord de intereses (como vimos, 145.000 millones de reales, el

9,25 % del PBI). En 2003, este gasto había sido de 114.000 millones de reales (8,47 % del PBI).

Otro problema clave de la economía brasileña en el primer año del gobierno Lula fue la reducción de las inversiones. El sector público no pudo invertir por la obligación de lograr el “superávit fiscal primario”; el sector privado (nacional y extranjero) invirtió poco porque las perspectivas de crecimiento de la economía no eran buenas y por lo tanto las expectativas de ganancias tampoco. El gobierno espera revertir esta situación con la implementación de la “Asociación Público-Privado”, programa inspirado en el *thatcherismo* británico. El propio sector privado, mientras tanto, no se muestra entusiasmado con esta posibilidad. Pide mayores garantías, además de una política orientada al crecimiento de la economía.

La política económica del gobierno Lula logró por lo tanto grandes “conquistas” para los mercados financieros y degradó de forma muy significativa la situación de los trabajadores. Comprometió las posibilidades de crecimiento de la economía. Mientras tanto, Lula y el núcleo de su gobierno la consideran un gran éxito y anuncian que será mantenida. Tanto por su lógica enteramente orientada hacia los mercados, como por su carácter de clase pro-capital financiero y anti-popular, esta política económica solo puede ser clasificada como neoliberal.

b) La aprobación de la reforma previsional

El gobierno Lula dedicó sus mayores esfuerzos políticos durante 2003 a la aprobación de las reformas previsionales y tributarias. La aprobación de la reforma previsional fue además considerada por el gobierno como una de sus grandes victorias en el año.

En teoría, el principal objetivo de esta reforma fue la reducción de los gastos previsionales, vistos por el gobierno (y por los mercados) como muy elevados e injustos. Mientras tanto, en este aspecto, sus resultados serán, bajo la mejor de las hipótesis, muy modestos, además de verse recién en el largo plazo. Se estima que en 20 años habrá una economía de cerca de 40.000 millones de reales (¡menos de un tercio del gasto del sector público con intereses solo en el año de 2003!). Por otro lado, la reducción de los salarios reales y el aumento de la informalidad (esto es, de la existencia de trabajadores sin garantías laborales, que no realizan contribuciones previsionales, ni tampoco sus patrones) llevaron en 2003 a un empeoramiento significativo de la situación previsional. El gobierno calcula el déficit en un 1,7 % del PBI para 2003.

Así, al contrario de lo que se suele decir, la reforma previsional no fue puesta en marcha principalmente por cuestiones fiscales. La razón fundamental del empeño con que el go-

bierno Lula la encaminó fue sin duda la de dar una “señal positiva” a los mercados: si era capaz de cambiar una posición tradicional de su partido (reafirmada hasta en la campaña electoral en 2002) y de enfrentar una de sus principales bases sociales – los funcionarios públicos para agradar a los mercados, ciertamente podía ser considerado por ellos “confiable”.

Es importante recordar que, con esta reforma, el gobierno Lula no sólo enfrentó un sector de su base social, sino que enfrentó también a un amplio sector de su propio partido, no aceptando el cambio de posición del PT. Por otra parte, los especialistas del PT en cuestiones previsionales rechazaron casi unánimemente la reforma encaminada. Y la cuestión de la reforma previsional estuvo en el origen del proceso en el cual cuatro parlamentarios del PT fueron expulsados del partido a fines de 2003.

La otra reforma constitucional aprobada –la reforma tributaria– se redujo finalmente a una parte pequeña de las intenciones iniciales. No puede de hecho ser considerada una reforma.

c) La política exterior

La política exterior del gobierno Lula es considerada, con razón, como uno de los puntos en que su gobierno se diferencia positivamente del de F.H.Cardoso. Sus aspectos positivos son la búsqueda de relaciones más estrechas con los países de América latina y del Tercer Mundo en general, y

una postura algo más independiente ante los Estados Unidos. Diversos sectores del PT y de otros partidos de izquierda, frustrados con el conjunto de las políticas del gobierno Lula, vieron en esta política la demostración de que, por lo menos una cosa que el gobierno ponía en práctica, tenía una cara de izquierda.

Sin embargo, incluso ahí las limitaciones del gobierno Lula se muestran de manera llamativa. La defensa de intereses brasileños se hace en general bajo la bandera del “libre comercio”; la posición de los EE.UU. respecto del ALCA es criticada sobre todo por la defensa del proteccionismo en la agricultura y en otros sectores, y por lo tanto por su incoherencia en esta cuestión. Brasil se enfrenta a la versión del ALCA deseada por los EE.UU.; pero contrapone la de un “ALCA *light*”, una versión en que los perjuicios para los países de América latina serían reducidos, pero no eliminados.

El hecho de que un nuevo gobierno brasileño haya adoptado una postura más independiente y más efectiva en la defensa de ciertos intereses nacionales respecto del anterior, no es suficiente para concluir que la política internacional es “de izquierda”. Basta ver que en la oportunidad en que probablemente Brasil afirmó más claramente esta postura –en la conferencia de Cancún de la OMC– tuvo como socio a la India, gobernada por un partido claramente de derecha.

Aún más importante para dejar en claro las limitaciones de la política exterior del gobierno Lula es el hecho de que una parte fundamental de la misma es conducida por el Ministerio de Hacienda y por el Banco Central. Las relaciones con el FMI y otras instituciones financieras deben ser consideradas parte de la política exterior. Del mismo modo, la adopción de la libertad para los movimientos de capitales forma parte de las buenas relaciones con los mercados financieros internacionales. Como vimos, el gobierno Lula es presentado como modelo por el FMI. Esto se contrapone a los esfuerzos de aproximación con países de América latina: en 2003, Brasil no dio apoyo a la resistencia conducida por el gobierno Kirchner antes las presiones del FMI (en 2004 hay una pequeña mejora en este aspecto: Lula defendió la flexibilización de algunas reglas del FMI, y se aproximó al gobierno Kirchner). Además, el gobierno Kirchner, que ciertamente es un gobierno burgués, estuvo en general a la izquierda del gobierno Lula.

En realidad, el impacto internacional del gobierno Lula fue sobre todo *negativo*, y muy negativo. Este gobierno se volvió un modelo para el FMI y un apoyo para los sectores más neoliberales de la socialdemocracia. Peor todavía, el hecho de que “hasta el mismo” Lula y el PT (que por más de dos décadas fueron vistos como representantes de una iz-

quierda auténtica) estén llevando adelante una política económica conservadora, ortodoxa, neoliberal, es usado por la derecha internacional para confirmar el famoso argumento de Margareth Thatcher: “no hay alternativa”.

d) La consolidación de la base aliada

Otra cuestión decisiva para la evaluación del carácter del gobierno Lula es su política de alianzas. Fue a ella que el ministro José Dirceu dedicó la mayor parte de su esfuerzo.

En este aspecto particular, la situación no podría ser más evidente. La reforma ministerial al inicio de 2004 sirvió para consolidar la incorporación de casi todos los partidos conservadores al gobierno, incluyendo al PP de Paulo Maluf, mayor expresión de la derecha brasileña. En la derecha (si dejamos de lado el minúsculo partido del diputado Enéas, bastante folclórico) solo los partidos que formaban el eje del gobierno de F. H. Cardoso, el PSDB y el PFL, no forman parte de la base de apoyo del gobierno. Aún así, un sector del PFL, liderado por el senador Antônio Carlos Magalhães (otro símbolo de la derecha brasileña), lo apoya en general; y la mayor parte de estos dos partidos apoyó las iniciativas legislativas centrales del gobierno Lula (como la reforma previsional) con el argumento (correcto) de que estaban apoyando las políticas que siempre defendieron.

El método fisiológico¹ con que estas alianzas fueron construyéndose fue puesto en evidencia con el escándalo reciente, la revelación de corrupción del subjefe para Asuntos Parlamentarios de la Casa Civil, Waldomiro Diniz, quien tuvo que renunciar. No hay duda de que alguien como Diniz fue elegido para cuidar las relaciones con los parlamentarios por su experiencia en negociar ventajas para unos y otros.

Además de eso, con el estallido del escándalo, los nuevos aliados conservadores mostraron una importancia más decisiva que nunca para el gobierno. Su mayor preocupación pasó a ser la de evitar la instalación de un Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), sin duda recordando el precedente de la CPI de 1992, que fue uno de los principales instrumentos para hacer caer el gobierno Collor. Ocurre que tradicionalmente el PT defendía tales CPIs, siempre con el argumento de que es preciso investigar las denuncias que se hacen contra el gobierno: "quien no debe, no teme", etc. No tenía mucha experiencia, por lo tanto, en "impedir" la formación de las CPIs.

Los comentaristas políticos señalan de manera unánime que el personaje decisivo para evitar la formación de una CPI fue el presidente del Se-

nado, José Sarney (ex presidente de la República, y jefe de una de las oligarquías regionales más importantes del país; integra formalmente el PMDB, pero tiene profundas vinculaciones con el PFL, donde militan sus hijos). También quedó clara la importancia de otros personajes que se mueven con soltura en este tipo de cuestiones: los senadores Antônio Carlos Magalhães y Renan Calheiros (este último del PMDB, que fuera un elemento clave del gobierno Collor).

Con las alianzas hechas, el gobierno Lula controla, en teoría, casi el 80% del Congreso. Al comienzo de 2004, la consolidación de esta base parlamentaria fue presentada como gran victoria del gobierno. Se suponía que esto le daría tranquilidad para gobernar. Mientras tanto, la evolución de la situación política en febrero y marzo está mostrando que no es tan así. Esta base parlamentaria fue capaz de evitar la creación de una CPI; pero no apoyó al gobierno en la política económica. Tanto el PMDB como el PL expresaron muchas críticas. Probablemente, esto se explica tanto por razones electorales (comienza a quedar en evidencia que mostrar una cierta independencia del gobierno será útil en las elecciones de este año) como por la búsqueda de mayores ventajas en el gobierno. Con

¹ En la jerga política brasileña, "fisiológico" se contrapone a "ideológico". Métodos fisiológicos son los que no apelan a las convicciones políticas de cada uno, sino a los intereses materiales más directos: cargos en el gobierno, ventajas financieras, etc.

la fragilidad del gobierno revelada, estos sectores están exigiendo más a cambio de su apoyo.

Los defensores de la política de alianzas decían que era necesaria para viabilizar el gobierno; justificaban hasta la utilización de los métodos fisiológicos, con el argumento de que en las condiciones brasileñas serían inevitables, por un lado, y que no comprometerían la orientación política del gobierno, por el otro. Es verdad que las mayores presiones negativas sobre la orientación del gobierno no provinieron de los políticos conservadores, sino de los “mercados” y dos de sus representantes (gran parte de los economistas y la mayor parte de la prensa). Pero no hay duda que el gobierno Lula se volvió prisionero de su base parlamentaria.

III – Las disputas al interior del gobierno

a) Un gobierno atravesado por divergencias, pero con una orientación hegemónica evidente.

El objetivo aquí será hacer un balance de las principales divergencias que se expresaron con alguna nitidez públicamente por parte de miembros del gobierno o de dirigentes y parlamentarios del PT, principal partido del gobierno. Naturalmente deben existir en los debates internos del gobierno otras divergencias, algunas tal vez más agudas. Sin embargo, no es posible aquí intentar evaluar debates

que no se expresan, de alguna manera públicamente, en primer lugar por falta de la información correspondiente. Por otro lado, es razonable suponer que las divergencias que tienen mayores posibilidades de influir en la orientación general del gobierno terminan volviéndose públicas, por lo menos en alguna medida.

Prácticamente, desde el comienzo del gobierno Lula hubo manifestaciones de divergencias de miembros del gobierno referidas a los diversos aspectos de su orientación, y en particular a la política económica. Los propios criterios de composición del gobierno llevaron a que así fuera. De hecho, Lula armó su cuerpo de ministros contemplando los diversos sectores del PT, incluso los que están a su izquierda, y el conjunto de los partidos que apoyaron su candidatura en el segundo turno de las elecciones de 2002. Siendo este un espectro muy heterogéneo, no podría dejar de haber grandes diferencias entre sus miembros.

En el área económica garantizó sin embargo que el eje estuviera alineado con la orientación del gobierno anterior, es decir, con el de F. H. Cardoso. Nombró a Antônio Palocci (un médico, ex diputado e intendente de una ciudad del interior de Sao Paulo, Ribeirão Preto, que hasta entonces no había participado del debate económico ni en el PT ni en la sociedad) para el Ministerio de Hacienda. Éste armó un equipo con claro predomi-

nio de economistas ortodoxos (algunos de ellos vinieron del gobierno de F. H. Cardoso). Y nombró para la presidencia del Banco Central a Henrique Meirelles, ex presidente del Banco de Boston, y recientemente electo diputado federal por el PSDB; Meirelles mantuvo en el Banco Central a todo el directorio de su predecesor, Armínio Fraga.

Lula nombró para el área económica a dos ministros que son grandes empresarios y tienen vínculos con el PSDB (ambos apoyaron la campaña de José Serra para presidente), para los ministerios de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (Luiz Fernando Furlan) y de Agricultura (Roberto Rodrigues). El predominio del PSDB y del pensamiento conservador en el área económica se volvió, por lo tanto, avasallador.

El contrapunto en el área económica provenía principalmente del BNDES (Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social), un importante banco público orientado hacia el financiamiento del desarrollo. Para su presidencia fue nombrado el economista Carlos Lessa, afiliado al PMDB, pero miembro de su "ala progresista". El BNDES está formalmente vinculado al ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, pero Lessa, elegido directamente por Lula, posee una razonable independencia. Además, Lula nombró para el ministerio de Planeamiento al economista Guido Mante-

ga, afiliado al PT, que armó un equipo no alineado al pensamiento económico conservador. Lessa, sin embargo, tiene un ámbito de actuación limitado, y Mantega es un ministro débil y se opone poco a Palocci o al Banco Central.

A partir de la composición del gobierno y tomando en cuenta su desarrollo posterior, es posible formular una hipótesis sobre cuál es la estrategia seguida por Lula y por el núcleo del gobierno. El nítido predominio de la ortodoxia conservadora en el equipo económico y la fuerza otorgada a este equipo por el presidente de la República, sugieren que la inclusión de ministros que divergen de esta ortodoxia (en general representando posiciones tradicionales del PT) correspondió principalmente al objetivo de absorber y neutralizar estas divergencias. Dicho de otra manera: hubo una opción clara por garantizar una orientación económica conservadora y por subordinar a ésta toda la política del gobierno, dando al mismo tiempo algún espacio (por consiguiente, subordinado) a las posiciones tradicionales del PT. Esta opción sería necesaria para garantizar la buena convivencia con "los mercados" (preocupación obsesiva desde el inicio), quiere decir, con la burguesía, en particular con su sector financiero, y también con su sector internacional (en un lenguaje más claro, con el imperialismo). Y permitiría, por otro lado, evitar una explosión del PT.

Esta opción se explica, probablemente, por una doble convicción abrazada por el núcleo del gobierno, y especialmente por el propio presidente. En primer lugar, por la conclusión de que no hay alternativa a la economía capitalista, y que es preciso por lo tanto aceptar su marco general. Esta falta de alternativa se derivaría de la correlación de fuerzas (inclusive, pero no únicamente las electorales), pero también del desencanto con la posibilidad de construir cualquier forma de socialismo. En segundo lugar, por la idea de que es posible mejorar la situación del pueblo en este marco. O sea: sería posible otorgar un espacio (subordinado) a la defensa de las preocupaciones tradicionales del PT.

Es verdad que, como vimos, la política del gobierno Lula no solo ha sido coherente con la manutención del capitalismo — ha sido profundamente ortodoxa y neoliberal e impidió casi completamente la ejecución de las políticas que agradarían al PT. El pasaje de la defensa del capitalismo en general a la defensa del capitalismo hoy dominante, es con todo una consecuencia más o menos inevitable de la aceptación de la correlación de fuerzas existente, y puede ser considerada un desdoblamiento de la opción política básica.

Vale la pena notar que esta doble convicción de sentido también a la política de alianzas con sectores burgueses, cuya construcción se inició

durante la campaña electoral y fue reforzada después al comienzo del gobierno (principalmente con la elección del vicepresidente, José Alencar, gran empresario del ramo textil, y en ese entonces senador por un partido conservador, el Partido Liberal).

En este marco, la inclusión de diversos ministros identificados con las políticas defendidas tradicionalmente por el PT, no puede ser vista como una manera de poner en duda la orientación básica del gobierno. Muestra solamente, como fue dicho anteriormente, la preocupación de evitar una explosión del PT, y el esfuerzo por comprometer hasta la misma izquierda del partido con la opción conservadora adoptada.

Es posible que en el núcleo del gobierno haya alguna discordancia con relación a esta estrategia. Todo el desarrollo del gobierno Lula hasta ahora, sin embargo, la confirma. Todo indica que, si hay discordancias en el núcleo del gobierno, éstas tienen muy poca fuerza.

b) Divergencias en cuanto a la política económica.

Desde el comienzo del gobierno hubo manifestaciones de discordancia con relación a las medidas económicas. Hubo ante todo cuestionamientos a la limitación de los gastos públicos, que se deriva de la exigencia de un superávit fiscal primario elevado y la manutención de elevadas tasas de interés.

Obviamente, estos cuestionamientos no son nada sorprendentes. Incluso quien esté de acuerdo con la prioridad de pagar intereses de la deuda pública puede oponerse a reducir gastos en su propia área, y a nadie le gusta la recesión que es una consecuencia inevitable de una política que restringe fuertemente la demanda agregada de la economía. Así, estos cuestionamientos, por sí mismos y desvinculados de la propuesta de un curso alternativo, no indican una divergencia en la orientación general de la política económica. Hasta representantes del "mercado", defensores explícitos de políticas neoliberales, han criticado los excesos de las tasas de interés brasileñas. En el interior del gobierno, mientras tanto, el crítico más persistente de las elevadas tasas de intereses fue el vicepresidente, José Alencar, del PL.

Una divergencia más importante que las quejas contra la escasez de recursos y las tasas de interés es la oposición a una de las propuestas básicas del ministro Palocci, la de formalizar la autonomía del Banco Central. En este tema, quedó clara la posición divergente del ministro José Dirceu, quien anunció que la cuestión no estaba en agenda para este año, después de que Palocci la había definido como prioritaria en diciembre pasado.

Mientras tanto, por más que esta cuestión tenga importancia (la autonomía del Banco Central es una de las propuestas más caras a los neoli-

berales), no debe ser exagerada. Se trata de un tema en el cual Palocci está en la ofensiva, y donde los que se oponen solo defienden el status quo. Uno de los argumentos usados contra la formalización de la autonomía del BC, además, es que no es indispensable, pues el BC ya dispone en la práctica de esta autonomía. Así, en vez de ser un indicio para una divergencia central, la posición de José Dirceu parece reflejar apenas una mayor preocupación respecto de las repercusiones políticas negativas de la formalización de la autonomía del BC, especialmente en el PT y en la CUT (que tradicionalmente combatieron esta propuesta).

Otro debate importante que se desarrolló en el área económica se refiere a sus tentativas de dirigir también las políticas sociales del gobierno. En abril de 2003, el Ministerio de Hacienda divulgó un documento, "Política económica y reformas estructurales", en el cual expuso su estrategia básica. Se trata de un documento inspirado en una propuesta que circuló durante la campaña de 2002, coordinada por el economista José Alexandre Scheinkman, brasileño que vive hace años en los EE.UU., y quien fue jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, famoso por su conservadurismo. En este documento, el Ministerio de Hacienda defiende la focalización de los programas sociales del gobierno, propuesta formula-

da por el Banco Mundial y típicamente neoliberal. Este documento provocó un vivo debate en la época, y fue criticado por diversos integrantes del gobierno. Más recientemente, en noviembre, el Ministerio de Hacienda difundió otro documento, "Gasto Social del Gobierno Central: 2001-2002", en el cual está implícita la crítica a la existencia de universidades públicas. También este documento provocó muchas críticas, inclusive del ministro de Educación de la época, Cristovam Buarque, además de diversos dirigentes del PT.

También en este caso, sin embargo, es el Ministerio de Hacienda que está a la ofensiva, intentando tomar mayor influencia sobre el conjunto del gobierno, y sus críticos apenas tratan de defenderse. En el caso de la enseñanza pública, además de eso, la substitución del ministro Cristovam Buarque por Tarso Genro en la reforma ministerial de enero señaló un cambio de orientación en el Ministerio de Educación: este último ha encaminado propuestas que amplían el espacio de la enseñanza superior privada.

Lo que debe ser resaltado con relación a las divergencias entre miembros del gobierno (y principalmente de su "núcleo duro") respecto de la política económica, es que en ningún momento apareció la propuesta de un cambio general en su orientación. Por ejemplo, nadie propuso el rechazo al enfoque de buscar la "confianza de los mercados" a través de políticas

favorables para los mismos, o la adopción de controles sobre los movimientos de capitales. Esto sería esencial para tratar de ampliar la soberanía del gobierno brasileño en la definición de sus propias políticas, y debería ser el punto de partida para el diseño de otra orientación económica. Nadie puso en duda la importancia de priorizar el pago del servicio de la deuda pública (a pesar de haber críticas al exceso del "superávit primario"), y menos se planteó la hipótesis de renegociación de la deuda pública (aunque la renegociación de la deuda externa pública formó explícitamente parte de los documentos programáticos de Lula en 2002, y aunque estos documentos criticaron la prioridad otorgada por F. C. Cardoso en su segundo mandato).

Incluso por parte de los sectores mayoritarios del PT nadie se animó a defender la recuperación de las propuestas económicas tradicionales del partido. Asimismo recientemente, el 5 de marzo, con la ampliación de las críticas a la política de Palocci y Meirelles, lo máximo que la mayoría del PT hizo fue emitir una nota en la cual el 80% del espacio fue dedicado a defender y enaltecer al ministro José Dirceu, y apenas un párrafo pedía tímidamente cambios en la política económica: "Vamos a trabajar con ahínco para que el gobierno implemente las medidas necesarias para que el año 2004 marque el inicio de un nuevo y sustentado ci-

clo de desarrollo económico y social del país, a través de cambios en la política económica necesarios para la implantación y consolidación de todos nuestros programas sociales, económicos y administrativos, así como de desarrollo, con miras siempre a la conquista de mejores condiciones de vida para todos los brasileños, enfrentando con eficiencia los problemas coyunturales y estructurales que afectan nuestro país y a nuestro pueblo.”

Como esta posición no repercutió positivamente en la prensa y en los mercados, el presidente del PT, José Genoino, aclaró enseguida que no se trataba de pedir el cambio de los ejes de la política económica, como el superávit fiscal primario del 4,25 % del PBI. Tampoco se trataba de pedir otra política monetaria. “Apoyamos integralmente la gestión macroeconómica del ministro Palocci”, aclaró (¿?) Genoino. En fin, lo que la dirección del PT parecería pedir era la mantención de la política económica, pero sin las consecuencias negativas que se derivan de la misma.

Hay otros hechos significativos que hacen evidentes los límites de las críticas hechas al área económica del gobierno. Por un lado, que el núcleo del gobierno apoyó de modo totalmente unificado la propuesta de reforma previsional, central para el equipo económico, y orientada, como vimos, a la búsqueda de la confianza de los “mercados”. Por otro,

que todos los miembros de este núcleo destacaron siempre las “conquistas” de la orientación económica del primer año del gobierno, el control de la inflación y la recuperación de la “confianza” de los mercados en el país.

De esta forma, las críticas que se hicieron a la orientación de la política económica, o más directamente al área económica del gobierno por parte de sectores del gobierno, o del sector mayoritario del PT, tuvieron poca consistencia, y no indican la defensa de una línea alternativa. Su carácter es mucho más el de un lamento por las consecuencias dañinas de opciones básicas, y estas no son puestas en cuestión. Pueden existir divergencias en cuanto a la orientación general en la política económica en el núcleo del gobierno — pero, hasta ahora, éstas no se manifestaron.

Así, fueron los economistas vinculados al PT — incluso muchos de los que participaron de la formulación del programa de gobierno durante la campaña de 2002 —, sectores de la izquierda del PT y más limitadamente de otros partidos que participan en el gobierno, así como sectores de los movimientos sociales del ámbito del PT y de la izquierda que expresaron críticas más amplias a la política económica neoliberal, y que propusieron un curso alternativo. Pero no tuvieron hasta ahora ningún impacto sobre el núcleo dominante en el gobierno.

c) ALCA y negociaciones internacionales

Una de las áreas en que las divergencias en el interior del gobierno se manifestaron más claramente es la de las negociaciones internacionales. La más importante es la del ALCA.

La ventaja de la posición del gobierno Lula con relación al gobierno de F. H. Cardoso en estas cuestiones fue comentada anteriormente. Esta posición refleja antes que nada el pensamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores (conocido como Itamaraty), y estuvo expuesto a un bombardeo constante por una parte del gobierno: por el ministro Rodrigues (Agricultura), por el ministro Furlan (Desarrollo), y por el equipo del Ministerio de Hacienda (el mismo ministro Palocci no se manifestó públicamente). Estos sectores son más favorables al ALCA y defienden en las negociaciones, en general, una mayor "flexibilidad" para aceptar las propuestas de los EE.UU..

Por cierto, esta divergencia atraviesa el núcleo del gobierno: el ministro Dirceu dio muestras de apoyar la posición del Itamaraty, y el ministro Palocci obviamente apoya los posicionamientos de su propio equipo. También es cierto que ésta fue una de las divergencias más importantes del gobierno Lula.

Sin embargo, más de una vez es preciso registrar que en esta cuestión quienes están en la ofensiva son los sectores más liberales. Hoy, el ALCA

no está en vigor. Así, la lucha de los sectores más preocupados por la soberanía nacional y por la preservación de las posibilidades de un proyecto de desarrollo nacional (las cuestiones que están en juego en la discusión del ALCA) tiene como objetivo *evitar* la firma de un tratado que *empeoraría* enormemente las cosas para Brasil.

En otros aspectos de la política del Ministerio de Relaciones Exteriores es posible concluir que la iniciativa está en los sectores más progresistas del gobierno. Es lo que acontece en la política de priorizar las relaciones con América latina y las alianzas con el Tercer Mundo en general. Sin embargo, ya señalamos arriba que esta iniciativa, a pesar de ser importante, no predomina en el conjunto de la política exterior brasileña. Más que un país preocupado por la unidad y el refuerzo de las posiciones de los países del Tercer Mundo, Brasil aparece internacionalmente como un país identificado con las políticas del FMI y de los "mercados".

Es interesante notar que el sector que es visto como responsable por los aspectos más progresistas del gobierno Lula, el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es dirigido por un afiliado del PT. El ministro Celso Amorim es un diplomático de carrera, que ya había ocupado el mismo cargo en el gobierno de Itamar Franco, y que está más vinculado políticamente al PMDB. Aunque curioso, este hecho no revela una incoherencia: como vi-

mos, no es posible identificar la política del Itamaraty como de izquierda.

Es importante observar igualmente, que las posiciones de los sectores de izquierda del PT y de los movimientos sociales políticamente próximos al PT y de otros partidos de izquierda, son distintas incluso de los aspectos más progresistas de la política del Itamaraty. Por ejemplo, sectores como el MST y la Coordinación de los Movimientos sociales mantuvieron una posición contraria al ALCA en su totalidad, y reivindican que cualquier acuerdo al respecto sea sometido a un plebiscito. Aunque crítico con relación al ALCA, Itamaraty está guiado por la defensa del “ALCA light”, y no apoyó la idea del plebiscito.

d) Reforma agraria

La cuestión de la reforma agraria es una de las más importantes para la evaluación del gobierno Lula, por dos razones. Una, porque los movimientos agrarios – especialmente el MST – están entre los sectores de los movimientos sociales más activos de Brasil. El MST tiene una importancia en la izquierda brasileña que va mucho más allá de la importancia específica de la cuestión de la reforma agraria. La segunda razón es que el ministro de Desarrollo Agrario, Miguel Rossetto, es el principal representante en el gobierno de la izquierda del PT. El MDA es responsable de la agricultura familiar (mientras el Ministerio de Agricultura se ocupa

sobretudo del agro-negocio) y de la reforma agraria.

Aunque el gobierno Lula definió formalmente la reforma agraria como una de las prioridades de su gobierno, esto no se ve en la práctica. Como los demás ministerios, el MDA sufrió con la exigencia del “superávit primario” (que hasta le impide emitir TDAs, los títulos de la deuda agraria para expropiar tierras) y recibió presupuestos modestos, insuficientes hasta para mantener el volumen de asentamientos realizado en el gobierno de F. H. Cardoso.

El ministerio intentó compensar estas limitaciones con la mejora de la calidad de la reforma agraria ya realizada (es decir, procuró garantizar las condiciones de infraestructura, de tecnología y de crédito necesarias para viabilizar económicamente los asentamientos), por un lado; por el otro se esforzó por conseguir la ampliación de los recursos para la reforma agraria.

En noviembre de 2003 fue aprobado por el gobierno un Plan Nacional de Reforma Agraria que quedó debajo de las reivindicaciones de los movimientos agrarios. Hubo hasta un debate entre especialistas sobre si su alcance sería suficiente para caracterizarlo como una verdadera reforma agraria. Muchos entendían que, por su timidez, no cambiaría de forma significativa la estructura agraria brasileña. Pero el PNRA representaría, de cualquier manera, un gran au-

mento del volumen de asentamientos (400.000 familias en los cuatro años del gobierno Lula, siendo que en el primer año fueron poco más de 30.000 familias). Así, la primera reacción del MST al plan fue más positiva que negativa, y lo mismo pasó con los otros sectores de los movimientos agrarios brasileños.

Para viabilizar este plan, sin embargo, los recursos para la reforma agraria tendrían que ser aproximadamente tres veces mayor de lo que estaba previsto en el presupuesto 2004, en aquel momento en discusión en el congreso. Lula se comprometió formalmente a garantizar estos recursos. Mientras tanto, el presupuesto oficial no fue modificado, y hasta ahora no está claro que los recursos necesarios serán de hecho obtenidos. Por el contrario, la tendencia del gobierno fue reducir la liberación de recursos para el conjunto de los ministerios, y este problema tiende a agravarse ante la posibilidad muy real que el desempeño de la economía brasileña en 2004 sea peor que el proyectado (en los primeros meses del año, este desempeño es bastante más débil de lo que se esperaba; además hay una tendencia al deterioro de la situación internacional).

La situación del MDA es, por lo tanto, muy difícil. Las críticas al gobierno por parte de los movimientos agrarios (en particular por parte del MST y de los sectores más a la izquierda de la Iglesia) aumentaron por

la lentitud en la realización de la reforma agraria. Son críticas al gobierno en general, pero obviamente afectan también al MDA. Sin poner en marcha al menos el Plan aprobado en noviembre, será imposible justificar la permanencia en este ministerio de un ministro de izquierda, comprometido con la reforma agraria (y que defiende una línea general de gobierno muy diferente de la que se está llevando adelante).

e) La disputa que no se concretó: la política de alianzas

Para concluir esta evaluación del significado de las principales disputas de orientación en el gobierno, es importante señalar que hay una disputa clave de la cual no se ven trazos significativos con relación a las alianzas realizadas por el gobierno.

Desde el comienzo del gobierno, esta disputa fue muy reducida. De hecho, hubo una disputa durante la campaña electoral. La izquierda del PT se opuso a la alianza con el Partido Liberal, y la senadora Heloísa Helena, en ese entonces candidata a gobernadora de su estado, Alagoas, se rehusó a aceptar esta alianza. Por eso su candidatura fue retirada por la dirección nacional del PT.

Sin embargo, como Lula al final ganó las elecciones, en alianza con el PL, y recibiendo en el segundo turno el apoyo formal de otros partidos conservadores (como el PTB) y de sectores de partidos todavía más con-

servadores (como los apoyos de José Sarney y de Antônio Carlos Magalhães, entre otros), prevaleció en la práctica la idea de que la política de alianzas era un hecho consumado, y que no estaba más en discusión. La entrada del PP de Paulo Maluf a la "base aliada" (que apoyó en el segundo turno al candidato del PT a gobernador de Sao Paulo, José Genoíno, y declaró su simpatía por la candidatura de Lula), no provocó mayores turbulencias. El nombramiento de ministros burgueses y vinculados al PSDB (Furlan y Rodrigues) pasó casi sin críticas. En aquel momento, Lula estaba en el auge de su popularidad, e incluso la izquierda del PT estaba inhibida y le resultó difícil criticarlo públicamente. Finalmente, se decía, la elección de los ministros es una prerrogativa del presidente electo.

El mismo hecho probablemente más escandaloso del inicio del gobierno, el nombramiento del banquero afiliado al PSDB, Henrique Meirelles, como presidente del Banco Central, fue relativamente poco criticado. La oposición más importante fue la contestación indignada de la senadora Heloísa Helena, quien se negó a votar favorablemente al nombramiento de Meirelles (el presidente y los directores del Banco Central deben ser aprobados por el Senado); hubo todavía algunas críticas por la prensa (una de ellas hecha por el diputado Raul Pont, ex intendente de Porto Alegre). Poco después, el

acuerdo para llevar al senador José Sarney a la presidencia del Senado fue recusado solo por la senadora Heloísa Helena.

Durante el año 2003, las críticas más fuertes a la mezcla del PT con los partidos de derecha se dirigieron a un tipo muy particular de "alianza": la apertura de las filas del PT a políticos burgueses, conservadores y en algunos casos notoriamente corruptos. Fue criticada, por ejemplo, la afiliación al PT del gobernador electo en el estado de Roraima, posteriormente alejado del PT, cuando quedó en evidencia su participación en un amplio esquema de corrupción. Aún así, estas críticas vinieron solo de la izquierda del PT, y no consiguieron impedir un amplio proceso de afiliación y de pérdida de identidad del PT.

Por otro lado, en general la izquierda del PT centró sus críticas mucho más en las orientaciones políticas (por ejemplo, en la política económica), y no pidió en casi ningún momento la sustitución de los responsables por estas políticas (que incluían a los representantes de otros partidos en el gobierno, pero también a dirigentes del PT, como Palocci). El único ministro, salvo error, cuya sustitución llegó a ser pedida, e incluso así de forma poco enfática, y por un sector muy reducido de la izquierda del PT, fue Roberto Rodrigues. Aún así, esto ocurrió cuando este ministro notoriamente vincula-

do a la derecha ruralista defendió el derecho de los “fazendeiros” de armarse para enfrentar las ocupaciones de tierra.

En el caso de la política de alianzas, no es posible siquiera vislumbrar alguna divergencia en el núcleo del gobierno o en la dirección del campo mayoritario del PT. El ministro directamente responsable por la negociación de las alianzas fue José Dirceu, supuestamente el defensor más firme dentro del “núcleo duro” de una cara más petista para el gobierno.

IV – Un gobierno social-liberal

Es un hecho que el gobierno está atravesado por muchas contradicciones, y vive muchos conflictos internos, algunos de ellos muy importantes (por ejemplo, con relación al ALCA o a la reforma agraria). Pero el análisis hecho anteriormente no deja dudas en cuanto a la existencia de una orientación general claramente hegemónica, que se expresa antes que nada en la política económica neoliberal y en la política de alianzas. La política económica ha recibido muchas críticas, pero su continuidad está siendo garantizada por Lula. En cuanto a la política de alianzas, ni siquiera está expuesta a una crítica significativa.

Es bastante claro que los conflictos en el interior del núcleo del gobierno no ponen en duda la continuidad de la política económica neoliberal, y que la política de alianzas amplias con todos los sectores burgueses

es defendida por todos sus miembros. Por lo tanto, la continuidad de estas alianzas alcanza para impedir cualquier cambio significativo en la orientación general del gobierno. Nadie con sentido común puede esperar que el senador José Sarney, el senador Antônio Carlos Magalhães o el ex intendente Paulo Maluf acepten una orientación progresista del gobierno.

El núcleo del gobierno está claramente mucho más identificado con los ministros más conservadores y burgueses (con Palocci – él mismo miembro del núcleo de gobierno – y su equipo, con Rodrigues, con Furlan) que con los ministros más a la izquierda, que defienden intereses populares. Estos últimos tienen un papel claramente limitado y subordinado, y son mantenidos en el gobierno como concesión a la base social tradicional del PT, para evitar que ésta vaya toda para la oposición.

Aunque los sectores contrarios al ALCA en el interior del gobierno vienen impidiendo su implementación, la orientación general de la política económica no será alterada. Tampoco la hipótesis (que no parece muy realista) de ejecución del Plan de reforma agraria defendido por el MDA sería suficiente para revertir el carácter de subordinación a la amplia alianza realizada con sectores burgueses, que el gobierno impuso a los intereses populares.

Tal vez uno de los hechos que me-

jor expresa el carácter del gobierno sea la constatación de que, en rigor, no tiene oposición desde la derecha. La razón es clara: el gobierno Lula puso en práctica, en lo fundamental, el programa de la derecha. De hecho, las iniciativas políticas centrales del gobierno Lula siguieron y profundizaron proyectos anteriores del gobierno de F.H.Cardoso, siguieron el modelo del FMI y del Banco Mundial, y fueron diseñadas principalmente para agradar a los mercados financieros.

Por supuesto hay sectores que se diferencian por derecha de ciertas orientaciones del gobierno Lula, y que las combaten. La prensa más conservadora (por ejemplo, la revista *Vêja* y el diario *O Estado de S. Paulo*) desarrolla una campaña permanente contra la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores, contra las posiciones del MDA y contra las posiciones del Ministerio del Medio Ambiente (el tema del medio ambiente es uno de los temas en el cual hay más divergencias internas en el gobierno Lula). Pero en esta pelea, esta prensa apoya y es apoyada por sectores del propio gobierno. O sea, los sectores que están más a la derecha en algunas áreas más progresistas del gobierno Lula están también representados en el mismo gobierno. Por ejemplo, por el ministro Roberto Rodrigues, por el equipo del Banco Central o por los sectores dominantes del equipo del Ministerio de Hacienda.

La conclusión a la que debemos llegar es por lo tanto muy clara. El gobierno Lula no *está en disputa*, si por esto entendemos la disputa de su orientación general. Todo indica que un cambio significativo de sus rumbos solo podrá darse si la insatisfacción social y la oposición popular tuvieran un crecimiento suficiente para desestabilizar el gobierno (y la dirección del PT), para obligarlo a reformular toda su política de alianzas, y a apoyarse en la movilización social, etc. Este cambio, empero, ya sería un cambio *contrariando* la orientación ampliamente hegemónica del gobierno. Y nada garantiza que ante una crisis más grave el gobierno Lula, con su composición y orientación actuales, se inclinaría para la izquierda. Además de eso, a pesar de que la insatisfacción social esté creciendo, aún estamos lejos de una rebelión popular.

Al comienzo del gobierno Lula, la idea que él tenía “dos almas” era aceptable (como fue argumentado en el artículo de João Machado, “Les deux âmes du gouvernement Lula”, en *Inprecor* nº 478/479, enero-febrero 2003). Ya en ese entonces era posible percibir que de las dos almas la conservadora predominaba, y el argumento más fuerte para mantener una perspectiva relativamente abierta era la preocupación de no hacer una evaluación demasiado negativa al inicio, ante las esperanzas que el gobierno Lula despertaba incluso en la izquierda – un realismo más riguroso enton-

ces podía ser considerado una manifestación derrotista de pesimismo. Después de más de 14 meses, sin embargo, es preciso decir que el "alma" de izquierda está siendo completamente sofocada.

Los argumentos que todavía se encuentran a la izquierda para mantener la idea de que es posible disputar la orientación general del gobierno, pertenecen más al terreno del *wishful thinking* que al análisis político. Pesa mucho en la búsqueda de estos argumentos la visión de que la frustración con el gobierno Lula representará una derrota histórica para la izquierda brasileña. Aunque sea muy difícil evaluar el marco que tendremos después del gobierno Lula, es ciertamente probable que la izquierda auténtica esté por algún tiempo más débil que en el período desde 1989 hasta 2002, durante el cual el PT era un partido socialista capaz de disputar el gobierno de Brasil. Aquel PT, sin embargo, está siendo destruido por su dirección, y por el gobierno que ayudó a elegirla. La negativa a mirar esta situación de frente solo

podrá agravar el impacto negativo de la derrota.

El gobierno Lula tiene una orientación general neoliberal, o social-liberal, tomando en cuenta que aplica una política neoliberal apoyándose antes que nada en un partido de tradición socialista. Es un gobierno de colaboración de clases, que subordina los intereses populares a una alianza privilegiada con la burguesía, tanto brasileña como imperialista.

La explicación de cómo fue posible que el PT llegara a encabezar un gobierno con estas características va más allá de los límites de este artículo. También excede estos límites la discusión de la posición que los sectores de izquierda deben adoptar en el difícil marco brasileño actual.

Sin embargo, una cuestión se deriva directamente del análisis realizado: la participación en el gobierno Lula es cada vez más contradictoria con la defensa de los intereses populares y el socialismo. La izquierda socialista del PT (y de otros partidos) se encuentra ante la necesidad cada vez más apremiante de romper con este gobierno.

dialéctica

Revista de Filosofía y Teoría Social